



*"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría*

## Editorial

2

*Gobernabilidad, partidos y Asamblea Legislativa*

## Político

4

*Implicaciones políticas y culturales de la emigración salvadoreña*

## Económico

7

*El Informe sobre Desarrollo Humano 2005*

## Reporte IUDOP

10

*Los salvadoreños evalúan la situación del país a finales de 2005 y opinan sobre las elecciones de 2006*

## Reporte IDHUCA

14

*Derechos humanos y discapacidad*

## **Gobernabilidad, partidos y Asamblea Legislativa**

*En El Salvador, a lo largo de la postguerra, el deterioro institucional y la polarización política no han jugado a favor de la gobernabilidad. Es verdad que desde 1992 El Salvador no ha conocido situaciones de abierta ingobernabilidad. Sin embargo, desde ese año para acá, la gobernabilidad construida ha sido precaria, pues siempre ha sido desafiada no sólo por la polarización social —la que enfrenta, sordamente, a la minoría rica con la mayoría pobre—, sino por demandas intermitentes, y a veces violentas, de determinados sectores de la sociedad, insatisfechos con las autoridades, ya sea del gobierno central o de gobiernos municipales.*

*En lo que se refiere al gobierno central, un foco de disidencia social lo ha constituido la denuncia de los abusos y el hacinamiento en las cárceles, denuncia tras la cual lo que se ha puesto en cuestión al sistema penitenciario mismo. En lo que se refiere a los gobiernos locales, las alcaldías que han tenido más dificultades son las de San Salvador y Santa Tecla. En lo que toca a la primera, a lo largo del año, grupos organizados de comerciantes informales se han opuesto, por lo general de forma violenta, a los planes de reordenamiento en el centro histórico capitalino. Con estas protestas no sólo se ha puesto en evidencia la proclividad de los grupos que las encabezan a la violencia de calle —y también a la manipulación política—, sino también la incapacidad de las autoridades municipales para elaborar e implementar un plan de desarrollo de la ciudad capital en el que se combinen coherentemente, tanto la recuperación de los espacios públicos como las necesidades de sobrevivencia de quienes se dedican al comercio informal en sus calles, plazas y parques.*

*Quizás con un entramado institucional más sólido, problemas como los suscitados en los centros penales o con los comerciantes informales —así como otras situaciones de igual naturaleza— hubieran sido resueltos de forma más eficiente. Sin embargo, no fue ese el caso; por ello, esos conflictos no sólo se prolongaron en el tiempo más de lo debido, sino que tampoco han sido superados de raíz, pese a que, casi al cierre de 2005, aparentemente ha llegado la calma. Siguen presentes como una amenaza a la estabilidad social y, en consecuencia, como una amenaza para la gobernabilidad.*

*Siempre desde la perspectiva de la gobernabilidad, los partidos políticos no están contribuyendo a ella. No se trata tanto de problemas de debilidad institucional, pues tanto ARENA como el FMLN —los dos partidos más importantes— han alcanzado un buen nivel de institucionalidad. Ciertamente, de los demás partidos —PCN, PDC, PLN, Cambio Democrático (CD), FDR, PPSC y FPS,— no se puede decir lo mismo. Incluso, su contribución a la gobernabilidad del país, salvo en los casos del PCN y del PDC, es bastante reducida. Así las cosas, la mayor responsabilidad en materia de gobernabilidad recae en ARE-*

NA, FMLN, PCN y PDC. Y no sólo en 2005, sino también a lo largo de la postguerra, el desempeño de esos partidos en ese rubro ha adolecido de múltiples fallos.

La polarización política no le conviene a la sociedad salvadoreña. Los dos principales ejes de esa polarización han sido ARENA y el FMLN, los cuales, enfrascados en la descalificación recíproca, han perdido de vista los grandes problemas del país —económicos, medioambientales, sociales, culturales, de género—, así como la necesidad de crear unos consensos políticos fundamentales en torno a ellos.

A esa polarización se han sumado los otros partidos, especialmente el PCN y el PDC. Estos dos institutos políticos no han dudado, en la actualidad como en las dos legislaturas anteriores, en aglutinarse en torno a ARENA, permitiendo a este último imponer sus decisiones no sólo a nivel Ejecutivo, sino en los ámbitos legislativo y judicial. Esta alianza ha tenido graves repercusiones en la institucionalidad política del país: ha puesto la dinámica legislativa en manos de ARENA y de sus dos aliados, con lo cual —en virtud de arreglos bajo la mesa— se han tomado decisiones que violentan la legalidad política y la voluntad de los ciudadanos.

Ejemplo de ello fue la decisión de revivir, desde el TSE, al PCN y al PDC, pese a que la voluntad popular, en las elecciones pasadas, los condenó a desaparecer.

Con todo, lo más pernicioso para la institucionalidad del país —y más aun, para el fortalecimiento de la democracia— ha sido la transformación de la Asamblea Legislativa, por la conformación de la alianza ARENA-PCN-PDC, en caja de resonancia y apéndice del Ejecutivo. En 2005, la Asamblea Legislativa, al igual que en años anteriores, no tuvo la capacidad de insinuar siquiera algún tipo de autonomía frente a las decisiones (o indecisiones) del Ejecutivo, con lo cual la separación de poderes —si se añade a lo dicho la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con ex funcionarios vinculados a ARENA a propósito del Informe de Probidad— no dejó de ser una ficción.

Por su parte, la oposición política ha hecho poco —por su misma debilidad legislativa o por sus fricciones internas— para rescatar siquiera algo de la autonomía del parlamento. Incluso la oposición perdió la gran oportunidad de hacer suya, en el contexto del desastre ocurrido en la primera semana de octubre de este año, la demanda de rendición de cuentas que distintos sectores sociales pusieron en la mesa de discusión durante los momentos del desastre y en las dos o tres semanas siguientes al mismo. Es decir, la oposición ha jugado —quizá sin darse cuenta— a favor de ARENA y la derecha.

Lo anterior no es más que la expresión del divorcio existente entre la política y la sociedad. La política —partidos, Asamblea Legislativa, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial— no está en sintonía con los intereses ciudadanos fundamentales. Eso es lo que explica en parte tantos desatinos de la política y los políticos, así como su escaso compromiso con la gobernabilidad del país.

## Implicaciones políticas y culturales de la emigración salvadoreña

El documento *Migraciones y diversidad cultural: al encuentro de un nuevo “Nosotros”*, difundido recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) proporciona un caleidoscopio del fenómeno migratorio en El Salvador. Lejos de apreciaciones simplistas, la investigación del PNUD analiza distintas aristas de un fenómeno que está cambiando radicalmente la vida nacional.

La cada vez más nutrida diáspora salvadoreña hace pensar que El Salvador es, prácticamente, un país de emigrantes. Hay culturas que se han formado a partir de los grupos de emigrantes que han entrado a sus fronteras. Por el contrario, la cultura salvadoreña está cambiando su fisonomía por la población que sale de sus confines. Entre las múltiples incertidumbres que esto plantea, se pueden hacer dos preguntas: ¿cómo se relaciona este fenómeno con las estructuras socio-políticas y económicas del país? ¿En qué forma la noción de salvadoreñidad, con todo y sus volubilidades, se está viendo alterada con la emigración? Para responder estas preguntas, estas líneas se centrarán en las implicaciones políticas y culturales de la emigración salvadoreña, según el documento del PNUD.

### Un círculo vicioso

Una de las cosas que destacan en *Migraciones y diversidad cultural*, es el abordaje histórico de las migraciones salvadoreñas. Puede apreciarse que el éxodo de compatriotas hacia el extranjero — principalmente a los Estados Unidos y el resto de Centroamérica— no es un fenómeno reciente. Cuando se hace referencia a la diáspora salvadoreña, hay un marco de referencia inevitable: la guerra de 1980-1992.

En ese período, se conjugaron los factores políticos (la represión y la guerra en vastas zonas rurales, por ejemplo) con los factores económicos, creando una ola migratoria con características muy propias. Una ola migratoria que, en los primeros años de los ochenta, constituyó paulatinamente una serie de redes de cooperación entre nuevas hornadas de emigrantes salvadoreños en los Estados Unidos y otros países. Pero ese fue uno de los tantos episodios de la emigración durante el siglo XX.

Sin embargo, como recuerda el documento del PNUD, la migración tampoco es exclusiva del siglo anterior. Más aún, los desplazamientos demográficos constituyeron la población en el territorio salvadoreño durante la época prehispánica, pues “existen investigaciones consistentes que dan cuenta sobre las migraciones desde México que ocurrieron mucho antes de la conquista y colonización europeas, y que dieron origen a la cultura que actualmente ocupa El Salvador. Otras corrientes migratorias lencas provenientes del sur se asentaron en el extremo oriental de nuestro actual territorio”.

El documento señala cuatro períodos en la emigración salvadoreña al exterior desde el siglo pasado hasta el presente: 1920-1969; 1970-1979; 1980-1991 y 1992-2005. En el período comprendido entre 1920 y 1969, “la mayoría de los migrantes salvadoreños salían del país impulsados principalmente por la falta de acceso a la tierra y de oportunidades de empleo, especialmente en las zonas rurales”. Siempre el agro ha sido el sector más golpeado por las inequidades. Durante la Segunda Guerra Mundial, los salvadoreños se fueron a Panamá y Estados Unidos. Los destinos privilegiados eran México, Centroamérica y el Caribe.

En la segunda etapa (1970-1979), se da la guerra entre El Salvador y Honduras (1969), lo que afecta gravemente la situación de los trabajadores salvadoreños en el país vecino. Nuevamente puede verse que el factor determinante es la falta de oportunidades: “debe tenerse en cuenta que la migración de salvadoreños hacia la vecina Honduras estuvo motivada principalmente por la carencia de tierras de cultivo. En algunos casos, dadas las características del territorio hondureño, era también destino de refugiados políticos y aun de delincuentes comunes”, afirma el documento.

La ruptura de relaciones diplomáticas con Honduras y el fracaso del Mercado Común Centroamericano provocó una repatriación forzada desde aquel país. La emigración a Honduras había sido, durante el tiempo que duró, una forma de aliviar la presión demográfica, política y económica. Lo mismo ocurre en la actualidad, con la emigración hacia Estados Unidos. Al volver a El Salvador, los compatriotas que vivían en Honduras eran vistos como una carga que el país no podía asumir: “miles de refugiados demandaban trabajo, servicios educativos y de salud, albergues y otros requerimientos indispensables. Ambos países se reprocharon mutuamente haber acudido a las acciones militares para tender una cortina de humo sobre los graves problemas internos que cada país enfrentaba”, señala el PNUD.

La tercera etapa se da durante el conflicto armado. Las motivaciones económicas se entremezclan con las políticas. Alternando mecanismos legales e ilegales, los salvadoreños se asilaron en EE.UU., Australia y Canadá. El flujo migratorio fue tan masivo, que obligó a cambios en las leyes migratorias estadounidenses.

Finalmente, la cuarta etapa arranca en 1992. Se trata del fin de la guerra y el inicio de la posguerra. La paz creó muchas esperanzas y logró que una buena cantidad de salvadoreños exiliados regresaran a su

país. El encanto duró poco, pues “una vez pasada la burbuja de la paz, reaparecen viejos problemas tales como: la escasez de empleos atractivos, la falta de oportunidades para el desarrollo de pequeñas actividades productivas, crecientes niveles de desigualdad y el reinicio de la confrontación política. Frente a tal panorama, muchos decidieron migrar de nuevo, mientras que otros, que nunca se habían ido, optaron por buscar satisfacer sus expectativas fuera del país”.

Es importante señalar que, aunque cada período tenga características distintas (no es dable equiparar, por ejemplo, los contingentes de salvadoreños que se fueron a trabajar en el Canal de Panamá, inmortalizados por Roque Dalton en su *Poema de amor*, con los salvadoreños que salieron durante la guerra de los ochenta), hay algunas características comunes. Sin querer simplificar las cosas, puede decirse que el salvadoreño o la salvadoreña que abandona el país lo hace porque no encuentra oportunidades. Oportunidades para tener empleo, una vivienda digna o seguridad personal. Ya sea por motivos económicos o políticos, el denominador común es este: El Salvador no ha sido —ni es, desgraciadamente— un país de oportunidades. Al menos, no para la mayoría.

## **La necesidad de replantearse la identidad salvadoreña**

La discusión acerca de la identidad salvadoreña ha tomado un vigor especial a partir de la posguerra. Esa identidad no ha sido monolítica y estable. Ha estado sujeta a las más variadas influencias. Transculturación y mestizaje son dos palabras que pueden caracterizar a la salvadoreñidad. La emigración intensiva ha vuelto este problema aún más complejo, al grado que muchos estudiosos plantean que ya no es válido hablar de una identidad, sino de varias identidades salvadoreñas.

Las remesas son un tema insoslayable en

este replanteamiento de las identidades salvadoreñas: “aunque las remesas suelen verse únicamente como dinero, también entrañan aspectos simbólicos y culturales. No sólo reafirman las relaciones familiares y aseguran la expresividad afectiva, o promueven la diferenciación en las comunidades receptoras, sino que también representan la posibilidad de materializar proyectos que no son únicamente económicos. Las remesas están pensadas e imaginadas en términos muy concretos: las mandan ante todo ‘para los frijoles y las tortillas’, cuya significación no es directamente económica, sino cultural”.

Lo cultural no se restringe únicamente a esto. El surgimiento de pandillas salvadoreñas, que actúan de forma auténticamente transnacional, es parte del fenómeno. Estos pandilleros reivindican el ser salvadoreños frente a sus homólogos chicanos, puertorriqueños o negros. Es fácil, sin embargo, negar que esto forme parte de la identidad salvadoreña en nombre de una noción pura de salvadoreñidad, que nunca se ha dado en la vida real.

Este mosaico de aspectos, con sus interrelaciones, sus influencias, sus determinaciones, son los que conforman las identidades salvadoreñas. No sólo hay que hablar de un replanteamiento de la identidad, sino también de los espacios de lo salvadoreño. El concepto “departamento quince” alude a dos cosas. En primer lugar, a que lo salvadoreño no se constriñe únicamente al territorio nacional. En segundo lugar, ese espacio es transnacional. Es un espacio donde no hay un referente físico concreto (territorio), ni político (Estado salvadoreño), sino una comunidad de símbolos y de historias personales y colectivas, remitidas, eso sí, al espacio territorial llamado El Salvador.

Según el PNUD, deben asumirse una serie de retos. Entre ellos, asumir que El Salvador es un país diverso y que la identidad no se

reduce a una suma de clisés (“somos trabajadores y nos gustan el fútbol y las pupusas”, como cita el texto). Además, estaría la aceptación de las diferencias como consecuencia de la diversidad que constituye lo salvadoreño; el repensar la identidad tomando en cuenta la globalización —un proceso mundial ante el cual no cabe cerrar los ojos, o atrincherarse en identidades tradicionales— y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Quizás, entre los desafíos que plantea ese nuevo “nosotros”, el más candente sea el de la aceptación de las diferencias. La transición comenzada con los acuerdos de paz no ha culminado en una democratización plena y exitosa. La violencia y la intolerancia son síntomas de las deficiencias de la convivencia social en el país. También el permanente enfrentamiento y polarización políticas son muestra que no hay dinámicas democráticas robustas para resolver los conflictos.

Esto último está conectado con el desafío de fortalecer los vínculos sociales para constituir una identidad cultural que abarque la complejidad de aspectos que la constituyen. Esto implica combatir aquellos problemas que corroen dichos vínculos “la inseguridad, la desconfianza, la violencia, la corrupción y el desencanto”, las cuales “no son inamovibles marcas de identidad. No estamos fatalmente condenados a seguir así”. ¿En qué sentido pueden contribuir los elementos culturales? “El aprendizaje y la transmisión de conocimientos y experiencias, que permiten cambiar y cualificar la convivencia y actitudes, son un asunto central de la cultura”, reza el documento.

La asunción de la complejidad de la identidad o identidades salvadoreñas es un elemento importante no sólo para ayudar a entender lo que ocurre en la cultura salvadoreña, sino también para contribuir a una forma de convivencia arraigada en el diálogo, la solidaridad y el respeto.

## **El Informe sobre Desarrollo Humano 2005**

La semana pasada se presentó el *Informe sobre Desarrollo Humano 2005: una mirada al nuevo Nosotros. El impacto de las migraciones*. Una vez más sale a la luz un estudio sobre la realidad nacional bajo el auspicio del PNUD en El Salvador. El documento es el cuarto, desde que en 1999 se diera a conocer el primer informe. A partir de esa fecha, el PNUD ha impulsado la elaboración de este tipo de estudios cada dos años. Esta vez, el informe se centra en el impacto de las migraciones en el país. El documento destaca las transformaciones que ha sufrido el país en las áreas económica, social y cultural, como fruto de la migración de muchos salvadoreños al exterior.

Como es sabido, el informe es un estudio multidisciplinario que analiza la realidad nacional partiendo de un tema en particular. En él se tratan los problemas políticos, sociales, culturales y económicos que atraviesa el país. En las siguientes líneas se hará un recuento de los aspectos económico que toca el informe.

### **Generalidades**

El *Informe sobre Desarrollo Humano 2005* se concentra en el estudio de los efectos de las migraciones, reconociendo que la salida de muchos salvadoreños ha devenido en grandes transformaciones en la estructuración y funcionamiento de la economía. De acuerdo al informe, la migración tiene sus ventajas y desventajas desde la perspectiva económica. Por un lado, la salida de compatriotas ha aliviado las presiones económicas de aquellas familias que reciben remesas de familiares o amigos. En este punto, es importante aclarar que, en la mayoría de los casos, las familias que reciben remesas, si bien no han visto mejorar grandemente su nivel de vida, lo que reciben es suficiente

para hacer frente a sus necesidades fundamentales. Por otro, la salida de salvadoreños también resulta en una pérdida de “capital humano” que puede resultar, inclusive, en el fenómeno de la “fuga de cerebros”. La poca presencia de mano de obra calificada, fruto de las migraciones, es un freno al desarrollo económico del país.

Las migraciones han jugado un papel importante en el cambio de las fuentes de divisas para el país. En 1978, la mayor fuente de divisas estaba en las agroexportaciones de productos tradicionales (81%), seguidas de lejos por las exportaciones de productos no tradicionales fuera de Centroamérica (8%), las remesas (8%) y la maquila (3%). Para 2004, la situación es muy diferente. La principal fuente de divisas son las remesas (70%), seguidas de lejos por las exportaciones de productos no tradicionales fuera de Centroamérica (13%), la maquila (12%) y la agroexportación de productos tradicionales (5%). En un cuarto de siglo, los productos tradicionales que dinamizaron el sector externo han dejado de tener un papel relevante en la configuración del nuevo mercado mundial.

Los emigrantes constituyen el 20% de la población salvadoreña. Es decir, una quinta parte de la fuerza de trabajo se encuentra en el extranjero. Esa población envía remesas al 22% de los hogares salvadoreños. El monto agregado de remesas representa el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 91% del Presupuesto General de la Nación. La entrada de estos recursos contribuye a mitigar la situación de pobreza y exclusión social que sufren amplios sectores de la población.

La presencia de salvadoreños en el extranjero también ha permitido la configuración de una “nueva economía”.

Debido a la presencia de muchos compatriotas en otras tierras, se ha incrementado la demanda de telecomunicaciones. El emigrante llama constantemente por teléfono a sus familiares y amigos. Esto permite que muchas empresas de telefonía incrementen sus utilidades. De igual forma, la entrada de remesas a través de la red financiera permite que la banca local también se beneficie con el envío de dólares. Los emigrantes demandan el consumo de los llamados “productos nostálgicos”: tamales, pupusas, quesadillas, semitas, entre otros. El envío de grandes montos de dinero está asociado a la compra de casas y demás propiedades por parte de su cónyuge o hijos. En otras palabras, como fruto de las migraciones, se han constituido una serie de actividades económicas que ofertan una serie de productos y servicios para satisfacer la demanda de los salvadoreños en el extranjero.

Otro efecto importante de las migraciones y de las políticas públicas es la “urbanización del campo”, expresada en el incremento del empleo rural en los sectores comercio, industria y construcción, con relación al empleo agropecuario. La estructura del empleo rural ha cambiado en los últimos años. En 1998, 451 mil empleados rurales se dedicaban a actividades agropecuarias y 396 mil se dedicaban a actividades no agropecuarias. En 2004, la situación fue diferente, 400 mil empleados rurales se dedicaron a actividades agropecuarias mientras que 513 mil hicieron lo propio en actividades no agropecuarias.

## Una evaluación del modelo económico

El capítulo 3 del *Informe sobre Desarrollo Humano 2005* está dedicado al análisis de los problemas económicos que atraviesa el país. El capítulo titulado “El impacto macroeconómico de la migración y las remesas: la necesidad de un nuevo modelo de crecimiento”, inicia con una breve descripción de los efectos del modelo de sustitución de importaciones y de la guerra

en la economía. Posteriormente, y como punto central, se dedica a resaltar las “líneas maestras” del modelo económico que impulsó en los años noventa el primer gobierno de ARENA. Seguidamente, contrasta estas líneas maestras con los resultados concretos que arrojó su implementación, explicando por qué los resultados obtenidos fueron tan diferentes de los esperados. Finalmente, se dan lineamientos para la construcción de un nuevo modelo económico, partiendo de la obsolescencia del modelo actual.

En la introducción del capítulo tercero del informe se sostiene que, en 1985, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) fue la pionera en diagnosticar que la mala situación económica no era fruto exclusivamente del entorno (conflicto armado, sequías, inundaciones). El mal desempeño económico también se debía a características estructurales que no habían sido modificadas, debido a que el país carecía de un modelo económico capaz de lograr un nivel de crecimiento que posibilitara el desarrollo del país. Esta afirmación del *Informe sobre Desarrollo Humano 2005* es discutible. En 1980, el Departamento de Economía de la UCA analizó los problemas económicos nacionales, con lo cual se apuntó a la necesidad de operar cambios sustanciales en el modelo imperante, con miras a una nueva estrategia de desarrollo económico.

En estas líneas no se abordarán los rasgos del modelo económico que impulsó el primer gobierno de ARENA. Esta etapa ha sido objeto de muchos estudios y es mejor referirse a los resultados concretos que arrojó su implementación y a las causas de sus limitaciones.

## Resultados del modelo económico actual

En los pasados gobiernos de ARENA, la tasa promedio de crecimiento económico para cada quinquenio, fue cada vez menor. En el período de gobierno de Alfredo

Cristiani, fue de 5.9%, mientras que, durante el de Calderón Sol, llegó al 3.9%. En la administración de Francisco Flores, apenas alcanzó el 1.9%. En pocas palabras, la tasa de crecimiento promedio en la última década cayó en un 2%. En el sector externo se incrementó la brecha comercial. Esta se quintuplicó, al pasar del 13.8% del PIB en 1990, al 19.9% en 2004.

La situación del empleo no ha cambiado sustancialmente en los últimos quince años. Si bien la tasa de desempleo abierto cayó del 8.7% en 1991 al 6.8% en 2004, la tasa de desempleo urbano aumentó de 34% a 34.6% para el mismo período. De igual forma, para el mismo periodo, el salario promedio real bajó en un 12% y el salario mínimo real para el comercio e industria descendió en 17%. Los datos mencionados demuestran lo pocos logros del modelo económico vigente, a pesar de que el partido oficial y algunos sectores afines tratan de presentarlo como el “camino correcto” en el que se encuentra el país.

La falta de logros, según el informe, se debe, entre otras cosas, a la falta de competencia y regulación en algunas ramas claves de la economía, a una fallida apuesta estratégica en ramas económicas con débiles encadenamientos productivos y a la apreciación del tipo de cambio real. Estos elementos correspondientes al marco legal, organizacional y monetario del modelo han tenido efectos perversos en la sociedad.

Entre estos resultados y sus causas, es importante enfatizar el comportamiento de los salarios reales con respecto a la productividad del factor trabajo y la relación entre la política cambiaria y la política comercial.

Es interesante saber que la productividad laboral en la producción de bienes es superior que la productividad del mismo factor en el sector servicios, cuando el salario real más alto se encuentra en el último sector. Es decir, que, para los empleados que se dedican a la producción de

bienes, su salario no corresponde a su nivel de productividad. Ello implica un mayor deterioro en su calidad de vida.

Los mayores salarios en el sector servicios no están asociados al incremento de la productividad laboral. Al contrario, se deben a los altos precios que cobran las empresas del sector —fruto de la falta de competencia— lo cual permite ciertos incrementos salariales. Esto constituye una dinámica nociva, que, por una parte, beneficia al sector menos productivo de la economía, pero, por la otra, arroja las mayores tasas de crecimiento.

Otra de las dinámicas contradictorias del modelo se refiere al manejo de la política cambiaria y comercial. Mediante la fijación del tipo de cambio nominal y la fuerte entrada de remesas se ha dado una apreciación del tipo de cambio real. Este fenómeno se consolidó con la dolarización. La entrada continua de dólares presiona hacia el incremento de la demanda interna que se vuelca grandemente al consumo de bienes importados generando un desequilibrio en el sector externo. Más en detalle, el informe dice: “se han encontrado evidencias sobre la existencia de efectos macroeconómicos perversos derivados de las remesas que recibe El Salvador, en el sentido de que tales flujos conducen a un aumento en los precios y a una disminución en el nivel de actividad económica. A su juicio, tales resultados vendrían a reiterar que la economía salvadoreña está padeciendo una especie de ‘enfermedad de remesas’, la cual, combinada con un alto grado de apertura comercial, no permite que la demanda resultante de las remesas sea gastada en producción local, sino en importaciones”.

Finalmente, es necesario que el gobierno preste atención al *Informe sobre Desarrollo Humano 2005* y opere cambios importantes en la política económica. El modelo económico vigente se encuentra agotado. Es necesario buscar nuevos senderos para el desarrollo económico y social del país.

## Los salvadoreños evalúan la situación del país a finales de 2005 y opinan sobre las elecciones de 2006

En la opinión pública salvadoreña prevalece una percepción más bien pesimista sobre el estado de la economía nacional y sobre el futuro en el país al cierre del año 2005, según revela la más reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). El sondeo, efectuado con el propósito de recoger las percepciones de los ciudadanos sobre la situación general del país, sobre los sucesos acaecidos en 2005 y sobre las elecciones municipales y legislativas que se celebrarán el año próximo, se llevó a cabo entre el 11 y el 20 de noviembre del año en curso, con una muestra nacional de 1,876 entrevistas a adultos, la cual es representativa de toda la población salvadoreña de 18 años y más que vive en el país. La encuesta posee un error muestral del más/menos 2.2 por ciento.

Un poco más del 63 por ciento de la población piensa que la pobreza aumentó durante el año que finaliza, mientras que casi el 30 por ciento considera que la pobreza se mantuvo igual y solamente el 6.8 por ciento cree que la pobreza disminuyó. En la misma línea, más de la mitad de los salvadoreños (53.5 por ciento) afirmaron que la situación económica del país empeoró, frente a un 37.9 por ciento que señaló que se mantuvo igual y un 8.6 que dijo que la economía nacional mejoró.

En términos de economía familiar, la mayoría de salvadoreños (53.7 por ciento) cree que su situación económica se mantiene igual, no ha mejorado ni ha empeorado; en tanto que el 33.9 por ciento

piensa que ha empeorado y sólo el 12.4 por ciento opina que ha mejorado.

Relacionado con esas opiniones se encuentra la percepción casi generalizada de que el costo de la vida aumentó mucho en el país durante el año 2005. Más del 70 por ciento de los ciudadanos piensa de esa manera, mientras que el 13 por ciento considera que el costo de la vida ha aumentado algo, el 12.3 por ciento cree que poco y solo el 2.4 por ciento dijo que el costo de la vida no ha aumentado durante el año. La mayoría de los encuestados creen que la razón principal del aumento está en la dolarización (65 por ciento); el resto de ciudadanos se divide en señalar la falta de control del gobierno en los precios (17.1 por ciento) y el incremento de los precios del petróleo (13.3 por ciento), entre otras razones.

Preguntados sobre cómo piensan que va a estar el país en términos económicos el próximo año, la mitad de los encuestados (50.4 por ciento) dijeron que va a estar peor, una tercera parte (32.6 por ciento) dijo que va a estar exactamente igual y sólo un 13.5 por ciento adelantó que el país va a estar mejor.

De hecho, consultados sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el cual entra en vigor el próximo año, el 42.8 por ciento de los salvadoreños dijeron que el mismo va a generar más pobreza, mientras que, por el contrario, el 28.6 por ciento dijo que dicho tratado ayudará a combatir la pobreza y el 25.4 por ciento de los entrevistados aseveró que el tratado no cambiará nada. En la

misma línea, se preguntó a los salvadoreños sobre el impacto que el convenio comercial tendrá sobre los ciudadanos. Las respuestas muestran que el 44.5 por ciento piensa que el TLC con los Estados Unidos le perjudicará personalmente, mientras que el 21.3 por ciento considera que se verán beneficiados y el 31.5 por ciento tiene la opinión que dicho tratado no alterará en nada su situación personal. La encuesta de la UCA reveló, además, que la mayoría de salvadoreños ven a los ricos, a los empresarios y a las grandes empresas, como los beneficiarios directos del tratado en cuestión.

## **Crimen e inseguridad**

Al pesimismo por la situación económica se le suma también la preocupación de los salvadoreños por el aumento del crimen y la inseguridad ciudadana. Preguntados sobre la situación de delincuencia en el país durante el año que finaliza, más de la mitad, el 57.2 por ciento de los ciudadanos, respondió que la criminalidad aumentó en 2005; en tanto que el 23 piensa que la misma siguió igual y solamente el 19.8 por ciento sostuvo que la violencia delincriminal disminuyó en el presente año. Esta opinión sobre el aumento de la violencia en 2005 representa la más alta registrada por las encuestas de opinión en los últimos cuatro años.

Sin embargo, preguntados sobre si han sido víctimas de algún hecho delincriminal en el ámbito personal, solamente el 14.8 por ciento de los ciudadanos respondieron afirmativamente, el 85.2 por ciento restante contestó que no ha sido víctima de ningún hecho de violencia directamente en 2005.

Con todo, las opiniones de la gente sobre los planes gubernamentales para contrarrestar a las pandillas siguen siendo muy favorables, a pesar de la percepción del aumento de la delincuencia. El 82.9 por ciento de los salvadoreños dijo estar muy

de acuerdo o algo de acuerdo con la implementación del Plan Súper Mano Dura, mientras que el 17.2 por ciento se mostró muy o algo en desacuerdo. Asimismo, las opiniones sobre el Plan Mano Amiga se distribuyeron casi exactamente de la misma manera, con una gran mayoría de salvadoreños mostrándose de acuerdo con dicho plan.

Preguntados sobre qué tan efectivo ha sido el Plan Súper Mano Dura, casi el 25 por ciento dijo que mucho, seguido de un 29.8 por ciento que señaló que "algo" y un 45.4 por ciento que sostuvo que el plan ha contribuido poco o nada a reducir el problema de las maras.

## **La evaluación general del país**

Más allá de los aspectos económicos y de seguridad, a los salvadoreños se les pidió que evaluaran el estado general del país al terminar el año 2005, en comparación con el año anterior. Los resultados muestran que predominan la reserva y el pesimismo. Casi el 40 por ciento de los consultados opinó que el país se encuentra exactamente igual que el año pasado; mientras que un porcentaje cercano, el 38.4 por ciento, dijo que el país se encuentra peor. El 22 por ciento restante señaló que El Salvador está mejor.

No obstante, cuando se preguntó a quienes dijeron que el país está igual o está peor, la mayoría de razones brindadas por los ciudadanos se refieren a los principales problemas del país: delincuencia, desempleo, alto costo de la vida, economía, entre otros. Quienes, por el contrario, sostuvieron que en términos generales el país está mejor dieron las siguientes razones: hay más ayudas para la gente, la reducción del crimen, el aumento de empleos, etc.

Un dato que revela el sentir predominante entre la población es que tres de cada cuatro salvadoreños (74.9 por ciento) piensan que El Salvador necesita un cambio y

solamente uno de cada cuatro (20.9 por ciento) cree que el país va por un buen camino.

## **Evaluación de la gestión del gobierno en 2005**

Los salvadoreños calificaron el desempeño del gobierno durante 2005 con una nota general de 6.38 (en una escala de cero a diez). Esta nota, aunque positiva en comparación con gobiernos anteriores, representa un promedio más bajo que las evaluaciones previas sobre el desempeño del gobierno de Antonio Saca.

No obstante, y preguntados directamente sobre la gestión presidencial, casi el 43 por ciento de los consultados consideraron que el presidente Saca está gobernando bien al país, en tanto que el 33.3 por ciento señaló que no está gobernando bien al país, pero tampoco mal; y el 23.9 por ciento dijo que el presidente está gobernando mal.

Sobre la promesa del presidente por mejorar la situación social del país, las opiniones se dividieron en tercios: el 35.6 por ciento de los salvadoreños piensa que el presidente no está cumpliendo con su promesa, en tanto que el 34.4 por ciento cree que el presidente sí la está cumpliendo y el 30 por ciento señala que la está cumpliendo en parte.

## **Confianza en las instituciones y en algunos actores sociales en 2005**

La encuesta de la UCA abordó también la confianza que manifiestan los salvadoreños ante las diversas instituciones nacionales y algunos actores del entorno político y social.

De acuerdo con los resultados, las instituciones o actores en los que más confían los salvadoreños a finales de 2005 son: la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Les siguen los medios de comunicación, las alcaldías, la PNC, la Fuerza Armada, la Procuraduría para la Defensa de

los Derechos Humanos y el gobierno central. En un tercer grupo de instituciones se encuentran: la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el TSE.

Finalmente, en el último lugar de la confianza ciudadana se encuentra la institución que debe representar a los ciudadanos: la Asamblea Legislativa; y algunos actores sociopolíticos de importancia: los empresarios, los sindicatos y los partidos políticos.

## **Opiniones sobre los comicios**

Solamente la mitad de la población se muestra muy o algo interesada en asistir a votar en las próximas elecciones municipales y legislativas de 2005. La otra mitad de los salvadoreños dijo que tenía poco o ningún interés en asistir a votar en las elecciones de marzo de 2006.

La encuesta de la UCA revela, no sólo que a muchos salvadoreños les resulta indiferente el proceso electoral, sino también que más de la mitad de los ciudadanos cree que los próximos comicios serán fraudulentos. De hecho, el 55.1 por ciento de los consultados por la encuesta del IUDOP dijo que en las próximas elecciones habrá fraude, frente al 37.8 por ciento que afirma que las elecciones serán limpias. Un 7.1 por ciento de la gente no quiso adelantar juicios sobre el tema.

Preguntados sobre las intenciones de voto, tanto para alcaldes como para diputados, los resultados nacionales revelan que la ventaja la conserva el partido de gobierno, seguido del FMLN a cierta distancia. En un tercer lugar se encuentra el PCN y después, el resto de partidos políticos.

En el caso del voto para diputados, el 31.4 por ciento de los salvadoreños dijo que votaría por ARENA, el 20.6 por ciento afirmó que votaría por el FMLN, el 4.6 por ciento lo harían por el PCN y el 2.6 por ciento votaría por el PDC. Porcentajes más reducidos de personas votarían por el resto de partidos

políticos. Sin embargo, cerca del ocho por ciento dijo que no votaría por ningún partido y casi el treinta por ciento no supo, o no quiso dar su preferencia electoral para diputados.

Cuando se trata de la intención de voto para alcaldes, los resultados son muy similares, con excepción del porcentaje obtenido por el PCN, el cual muestra un mejor desempeño en este tipo de elección que en la diputados.

## El municipio de San Salvador

Junto con la encuesta nacional, el IUDOP de la UCA llevó a cabo también una encuesta en el municipio de San Salvador con una muestra especial de 767 entrevistas, para conocer las opiniones de los capitalinos sobre las elecciones municipales.

A los habitantes de San Salvador se les preguntó de dos formas por quién es el mejor candidato a la alcaldía del municipio. En primer lugar, la pregunta fue realizada de manera abierta, es decir, sin mencionar ninguno de los nombres de los candidatos en contienda.

Los resultados mostraron a Rodrigo Samayoa, el candidato por ARENA, en primer lugar, con un 26.5 por ciento; seguido de Violeta Menjívar del FMLN, con el 17.7 por ciento y de Carlos Rivas Zamora, con el 11.6 por ciento; sin embargo, más del 40 por ciento no ofreció ninguna respuesta o contestó que ninguno.

Cuando se preguntó por el mejor candidato ofreciendo los nombres de los contendientes conocidos, los resultados se modificaron: Rodrigo Samayoa obtuvo el 33.9 por ciento de las respuestas; Carlos Rivas Zamora reunió el 24.9 por ciento de las respuestas y Violeta Menjívar concentró el 19.7 por ciento.

Preguntados sobre la intención de voto para la alcaldía de San Salvador, el 32.2 por ciento de los capitalinos señaló a ARENA; el 28.6 por ciento lo hizo a favor

del FMLN y el 4.6 por ciento mencionó al CD y/o al FDR. El 2.2 por ciento prefirió a otros partidos.

## En resumen

La encuesta de evaluación del año 2005, realizada por la UCA, revela que, al final del año, la mayor parte de los ciudadanos ven con pesimismo el estado del país, sobre todo en el ámbito económico. La percepción sobre el incremento del costo de la vida y el desempleo constituyen algunas de las variables que explican ese pesimismo.

Sin embargo, el alza del costo de la vida no es atribuida a la subida de los precios del petróleo sino que a la dolarización, la cual es vista por la mayoría de los salvadoreños como la causa principal del encarecimiento de las cosas. Las opiniones negativas sobre la economía alcanzan las opiniones sobre el TLC con los Estados Unidos. A diferencia de años anteriores, 2005 cierra con una creciente opinión de que el tratado comercial no traerá beneficios a la población.

También y a diferencia de los últimos tres años, al finalizar el presente año prevalece la opinión de que la delincuencia en el país está en aumento; aunque persiste el apoyo casi incondicional a los planes gubernamentales "Súper mano dura" y "Mano amiga".

Con respecto a éste último, la calificación general del mismo tanto como del presidente se mantienen más positivas que negativas, aunque también es posible advertir una cierta erosión en el respaldo al Ejecutivo en comparación con las últimas evaluaciones.

En el plano electoral, los salvadoreños aún muestran mucha indiferencia y desconfianza hacia el proceso. A pesar de ello, ARENA mantiene una ventaja importante en la carrera electoral por sobre el FMLN y eso incluye también las intenciones de voto por la alcaldía de San Salvador.

*San Salvador, 5 de diciembre de 2005*

## Derechos humanos y discapacidad

En estos días, la humanidad celebra dos acontecimientos trascendentales en el ámbito de los derechos humanos: el día de las personas con discapacidad, el 3 de diciembre, y el de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el 10 del mismo mes. La DUDH establece las prerrogativas básicas que las personas poseen por el hecho de existir. Lo contemplado en la misma no es de cumplimiento obligatorio para los Estados suscriptores, pero constituye la ruta para arribar a una sociedad democrática y en paz. Sus disposiciones son exigibles por cualquier persona sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, clase social, impedimento físico o mental, pues su goce no se limita a determinado grupo social. Sin embargo, no todos y todas disfrutan el goce de sus derechos por igual; de ahí lo imprescindible de crear mecanismos para facilitar su conocimiento amplio y su respeto general.

La niñez, por ejemplo, necesita más protección que la gente adulta. Igual pasa con las personas discapacitadas que exigen mayor atención de la sociedad y hasta dedicarles un día especial cada año, lo cual no responde a ningún capricho sino es, más bien, un recordatorio mundial del compromiso de respetar, aceptar e integrar a estas personas. Tampoco debe entenderse como una preferencia a favor de determinadas personas, sino como la concreción de una exigencia ineludible: situar en igualdad de condiciones a sectores con ciertas desventajas con el resto de la sociedad.

En esa línea, los Estados han elaborado y suscrito instrumentos legales —de carácter internacional y obligatorio— conteniendo derechos tendientes a la inclusión social de las personas más frágiles; así han surgido las convenciones sobre los Derechos del Niño, la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, entre otras. Éstas son parte del

ordenamiento jurídico interno de El Salvador y, por ende, exigible su cumplimiento al Estado; sin embargo, necesitan ser desarrolladas a través de leyes que respondan de manera concreta a la realidad del país.

En el caso de las personas discapacitadas, se aprobó ya la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidades, junto a su respectivo reglamento; así se pretende establecer el escenario propicio para su integración plena a la sociedad salvadoreña. Lamentablemente su elaboración adoleció de un análisis efectivo; por ejemplo, la política de reinserción de estas personas recae en el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), que está integrado por representantes de la Presidencia de la República, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Salud y de la Secretaría Nacional de la Familia, junto a otros once representantes de instituciones estatales y de asociaciones de personas discapacitadas.

En la práctica, el CONAIPD no ha sido capaz de ejecutar la política que ordena la mencionada norma y la mayoría de sus disposiciones son letra muerta. Así se expuso en el Foro Taller denominado “Un nuevo enfoque acerca de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, celebrado entre el 28 y 29 de noviembre; ahí quedo planteada la demanda de respetar los múltiples derechos de este grupo social; incluido el de considerar sus aportes al momento de tomar decisiones, sobre todo las referidas a su estatus.

Ahí, la representación del sector de discapacitadas y discapacitados señaló los constantes atropellos que padece cotidianamente; un ejemplo: la ausencia de infraestructura adecuada en hospitales y centros asistenciales para que las personas en sillas de ruedas puedan movilizarse, vulnera su derecho a la salud al impedir que ingresen a reci-

bir asistencia médica. Los últimos datos a la mano emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), que datan del 2000, son desalentadores: de todas las personas con algún tipo de discapacidad, sólo el 34.96% ha recibido terapia de rehabilitación. Esto es una muestra de la falta de interés gubernamental para ayudar a este sector.

El derecho a la educación se viola al no facilitar la entrada a los y las estudiantes en los centros escolares, por la misma razón; también por la obstaculización y la pasividad del Ministerio de Educación para integrarlas con el resto del alumnado, manteniéndolas marginadas pese a su normal desarrollo intelectual. Los datos de GTZ y OMS revelan que el 46.33% de la población discapacitada no sabe leer ni escribir; asimismo, se menciona que el 87% de la misma no asiste a algún centro educativo público o privado. Negarles educación afecta su futuro laboral, al no estar preparadas para ejercerlos. A quienes poseen una educación estándar, les resulta difícil optar a un empleo pues su aspecto físico les cierra las puertas en muchos lugares; sólo un 25.17% de estas personas trabajan y, de éste, el 47.27% lo hace en el sector agrícola. No todas estas personas tienen acceso a prestaciones sociales; la precariedad en la que se ven envueltas es alarmante y por eso dicen: “la discapacidad genera pobreza”. Eso se sustenta en que el 60.55% vive en tales condiciones.

El derecho a la libertad de circulación y movimiento se les vulnera día a día. Todo El Salvador está diseñado para que no puedan desplazarse; hacerlo entre postes del tendido eléctrico, vallas publicitarias, teléfonos públicos, aceras estrechas sin rampas y agujeros de cualquier tipo, es un verdadero peligro. En el país no existe, por citar otra situación básica, ningún medio de transporte público con mecanismo adecuado para facilitarles el ingreso a las unidades.

Todos estos factores demuestran que El Salvador no cuenta con una política que permita

integrar a las personas discapacitadas, no obstante las leyes que regulan sus derechos desde hace más de cinco años. El CONAIPD ha mostrado ser una entidad formal y no más; la pasividad de su labor refleja la falta de voluntad oficial para atender a los sectores más vulnerables del país, pese a que la misma Constitución ordena protegerlos.

Si fuera serio el empeño de cambiar la situación, se exigiría a todas las empresas públicas y privadas incluir en su planilla a una persona discapacitada por cada veinticinco empleados, tal como señala la Ley de Equiparación de Oportunidades; en caso de incumplimiento, debería multar con severidad a las empresas o —como ocurre en España— obligarlas a depositar los salarios de las personas no contratadas. El Estado también podría incentivar al sector empresarial mediante exenciones fiscales u otras medidas, para que incluyan en su fuerza laboral a este sector.

A la vez, se tendrían que realizar algunos cambios en materia educativa tanto en aspectos metodológicos como en la elaboración de textos escolares, en busca de una verdadera inclusión social en el área de educación. De igual manera, se debería exigir al sector transporte una cuota de autobuses con accesos para las personas discapacitadas como pasa en Costa Rica y solicitar que las instituciones correspondientes las tengan en cuenta al momento de aprobar los planos de las construcciones.

Ideas sobran; voluntad falta. La realidad lleva a esta conclusión sobre el estado los derechos de la población discapacitada, que es sistemáticamente ignorada por el Estado. Según lo expresado en el Foro Taller antes mencionado, esta gente se siente utilizada y ofendida por el gobierno; a la Secretaría Nacional de la Familia, la ven como una simple asociación de caridad que sólo se le acerca para posar en la foto. Si estas personas están dispuestas a hacer valer sus derechos, toca a la sociedad salvadoreña solidarizarse con ellas y exigirle al Estado que cumpla con su obligación de integrarlas a la misma.



El semanario *Proceso* selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. *Proceso* es una publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

#### SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico	\$ 50.00
El Salvador	
personal	\$ 15.00
correo	\$ 20.00
Centro América y Panamá	\$ 35.00
Norte y Sur América	\$ 65.00
Europa y otras regiones	\$ 85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre *Proceso* marque (503) 2210-6671 o escribanos a [cidai@cidai.uca.edu.sv](mailto:cidai@cidai.uca.edu.sv)